

ITALIA

INFORME DE CARITAS SOBRE EXCLUSIÓN SOCIAL

Caritas es el último recurso para los excluidos. Unas 5.000 personas al mes, a menudo menores de edad, impulsadas por la necesidad, se dirigen a sus 264 centros de atención, presentes en 134 diócesis, pidiendo bienes, servicios, un techo, pero también subsidios (sobre todo los italianos, un 24%) y un empleo (generalmente extranjeros, un 28,8%). Tienen en común el peso de la exclusión, el empleo que no tienen o si lo tienen es mal pagado, la instrucción insuficiente, las dificultades en encontrar una vivienda: en resumen, pobres.

El 13,9% de los usuarios, o sea uno de cada siete, se encuentra en condiciones de grave precariedad de vivienda (un 15,2% de extranjeros y un 11,6% de italianos). Dos personas de cada tres (concretamente el 71,5% de los extranjeros y el 57,6% de los italianos) están desempleadas.

Es lo que se desprende del "VII Informe sobre exclusión social", elaborado por la Caritas junto con la Fundación "Zancan" de Padua, basado en 30.000 entrevistas llevadas a cabo en 134 diócesis entre abril y septiembre de 2006, que confirma que en dos casos sobre tres (66,7%) los usuarios son extranjeros, del Este de Europa (34,1% de los inmigrantes) y del Norte de África (18,8%). Después están los italianos, procedentes de familias arruinadas tras una separación o un divorcio (19,9%, frente al 12,1% de los extranjeros), con un nivel de instrucción incluso inferior al de los inmigrantes (sólo un 9,8% tiene el título de escuela secundaria superior, frente al 31,6% de los inmigrantes).

Aumenta el número de familias cuyos recursos económicos superan por poco (de 10 a 50 euros) la línea de la pobreza. El Instituto de Estadística indica que se trata de más de 900.000 familias, que se ven obligadas a dirigirse a los centros de la Caritas.

De los fondos destinados, 44.540 millones de euros (750 euros *per cápita*) son estatales. Los Municipios destinan 5.011 millones de euros (86,15 euros *per cápita*). Desgraciadamente, la gran mayoría del gasto (91,4%) se debe a transferencias monetarias, y apenas el 8,6% se destina a los servicios.

En las intenciones de los autores, esta investigación debe servir como base para proporcionar los elementos cognoscitivos para la elaboración de un "Plan nacional de lucha contra la pobreza", cuyo presupuesto es una modificación profunda del sistema de bienestar italiano, el cual según el presidente de la Fundación "Zancan", «es obsoleto, de tipo asistencial, que distribuye dinero pero no es capaz de redistribuir riqueza».

El Plan propuesto por la Caritas tiende a invertir la lógica actual, basada en transferencias monetarias y en pocos servicios, mientras que en ningún otro país del mundo se lucha contra la pobreza de esta

forma. Hay que invertir el capital de que se dispone en los servicios, que se traducen en oportunidades para las personas.

Los Municipios y las Regiones deberían gestionar este nuevo sistema de protección social; en efecto, la reforma del Título V de la Constitución, aprobada en 2001, prevé que las instituciones territoriales se ocupen de los servicios sociales. El Informe pone de relieve que el Estado sigue aún gestionando 664 de los 750 euros anuales *per cápita* del presupuesto asistencial italiano.

Además, la aplicación del principio de subsidiariedad serviría para identificar con más eficacia el número de los beneficiarios, puesto que demasiado a menudo el gasto beneficia a personas ya protegidas y no a las más necesitadas. Esto caracteriza las sociedades del bienestar, donde hay fuertes organizaciones que tutelan las categorías ya garantizadas en perjuicio de los sujetos no representados, como la familia, para la que no se invierten recursos suficientes.

Por lo tanto, se propone al Gobierno la elaboración de "planes de inserción laboral y social con apoyo a la renta", en lugar de la renta mínima de inserción. Por otra parte, el desequilibrio entre los capítulos del gasto en asistencia es un problema antiguo. Sólo el 3% del Producto Interior Bruto se destina al gasto social, y el Fondo Social Nacional no llega a dos mil millones.

Para cambiar rumbo, la Caritas mira con interés a la recuperación de la evasión fiscal, sobre la que hay escepticismo por parte de otros, que en cambio proponen una reducción drástica de la deuda pública: si ésta disminuyera un 30%, se tendrían recursos por 20.000 millones de euros al año, más que suficientes para financiar el gasto social.